

Resumen ejecutivo

España avanza hacia el final de 2014 por un camino en el que se observan señales positivas de corrección de los desequilibrios que han agravado la crisis y de recuperación de la actividad. Al mismo tiempo, se hacen más evidentes los enormes desafíos a los que hemos de responder para desplegar un modelo de desarrollo inteligente y sostenible.

El reto es desarrollar un patrón de progreso en el que se combinen, equilibradamente, tres grandes vectores:

- Un crecimiento basado en la capacidad de competir y respetuoso con el medio ambiente.
- Unos ritmos de generación de empleo suficientes para absorber el enorme volumen de paro acumulado.
- Un funcionamiento de las políticas públicas capaz de conjurar los riesgos más graves de exclusión social y de ofrecer servicios de calidad.

Estas aspiraciones representan metas difíciles pero solo lográndolas será probable recuperar la confianza de la sociedad en las posibilidades de mejora colectiva, gravemente dañada en estos años de crisis económica e institucional.

Identificar los rasgos básicos del nuevo patrón de desarrollo, analizar los obstáculos que pueden dificultar la consecución de las metas y señalar qué palancas pueden facilitar los avances es el propósito de este Informe Fundación BBVA-Ivie 2014, cuarto de la serie iniciada en 2011.

Un escenario mundial muy exigente

Las profundas transformaciones de la economía mundial se derivan del extraordinario avance de la globalización de los mercados, los cambios tecnológicos y la arrolladora expansión de los países más poblados del planeta, cuyo progreso ha alterado sustan-

cialmente las posiciones competitivas de las economías. La velocidad de cambio del escenario internacional se ha acelerado y el futuro de países, empresas y trabajadores depende, más que nunca, de la agilidad con la que —individual y colectivamente— sean capaces de evolucionar y adaptarse.

Desde 2008 las economías avanzadas han padecido grandes dificultades, en especial la Unión Europea (UE), que muestra peor desempeño debido a la menor capacidad de reacción de buena parte de su tejido empresarial, las rigideces de sus estructuras sociales y las lagunas de su sistema de gobernanza. En agudo contraste con el estancamiento europeo, Estados Unidos vuelve a crecer y las economías en desarrollo lo hacen a tasas extraordinarias, en torno al 5,5% anual.

Las economías cuyos agentes no tengan visión, valentía y pericia para acometer la modernización económica e institucional que necesitan pueden verse abocadas a un prolongado período de crecimiento anémico. Apagado el fuego de la crisis de los mercados financieros, es tiempo de diseñar estrategias a medio y largo plazo capaces de responder a los muchos retos derivados de la globalización y la integración en las corrientes económicas internacionales de la formidable oferta de trabajo existente en las economías en desarrollo.

El impacto sobre las economías avanzadas del progreso de las emergentes será positivo en forma de bienes baratos, progreso tecnológico más rápido, oportunidades de negocio para las empresas dinámicas y trabajo para los individuos más cualificados. A la vez, el impacto será negativo sobre colectivos amplios de empresas y trabajadores. Los países han de prestar atención a la reestructuración del tejido productivo, el reciclaje del capital humano y los riesgos de exclusión laboral y social.

En el actual contexto, las empresas están obligadas a un esfuerzo constante para mejorar la productividad de sus factores y necesitan contar con un entorno institucional que facilite su adaptación permanente. Las que no se apoyen en estrategias de mejora continuada de sus organizaciones y de la relación calidad/precio de sus productos estarán amenazadas por la pérdida de mercados. Las economías que no sean capaces de preparar su capital humano y adaptar sus instituciones para apoyar la iniciativa empresarial y la inversión productiva, padecerán una dolorosa combinación de desempleo elevado y crecimiento precario.

La frágil recuperación europea

La Unión Europea debe ser un instrumento fundamental para la adaptación de sus Estados miembros a ese escenario mundial tan exigente, pero las instituciones europeas y la zona euro dan muestras de graves debilidades y limitada capacidad de respuesta. El crecimiento es frágil y la confianza en el proyecto europeo ha retrocedido en lugar de avanzar, pese a las mejoras logradas en la defensa del euro desplegada por la autoridad monetaria. Sus iniciativas han permitido un mayor margen de maniobra a las finanzas públicas y aliviar el efecto contractivo de la política fiscal, pero la eurozona sigue amenazada por el riesgo de deflación y la losa del desapalancamiento de muchos países, cuyos niveles de deuda pública y privada siguen dificultando la recuperación de la demanda interna.

Las incertidumbres solo se disiparán tras una recuperación nítida del crecimiento continuado y avances importantes en la construcción europea, como la creación de un espacio fiscal común de carácter federal y una mayor unión política. Sin progresos

en estos terrenos es improbable que existan políticas eficaces de estabilización y de empleabilidad. En ambos terrenos se necesitan instrumentos con la envergadura suficiente para reforzar el crecimiento y paliar el elevado desempleo de muchos países.

Existen otros factores que condicionan el potencial de crecimiento europeo a medio plazo y la competitividad. Ambos objetivos dependen de las mejoras de la productividad de los factores, el aprovechamiento de la elevada cualificación de gran parte de la población activa y una inserción ventajosa en las cadenas globales de valor. Todo ello exige cambios de especialización productiva como los que ya han llevado a cabo las empresas y las economías más competitivas, cambios que deben ser estimulados mediante reformas estructurales que mejoren el funcionamiento de los mercados de factores y de productos.

Para la necesaria reasignación de recursos productivos entre actividades es imprescindible que las empresas apuesten por reinventarse para seguir siendo viables. Pero estas decisiones tendrán menos impacto a corto y medio plazo si no vienen acompañadas de políticas nacionales y comunitarias que fomenten una recuperación de la demanda, superando una estrategia de austeridad cuyas limitaciones son cada vez más reconocidas. Solo combinando reformas y crecimiento se reducirán significativamente las altas tasas de desempleo de larga duración, que erosionan el capital humano acumulado y la confianza en el proyecto europeo.

España: retos a corto y a largo plazo

Los retos inmediatos para España son también los citados: consolidar el crecimiento y crear empleo y avanzar en reformas estruc-

turales —financiera, del mercado de trabajo, de las Administraciones Públicas, del sistema fiscal, de los organismos regulatorios— que contribuyan a mejorar la eficiencia productiva, para sentar las bases de la competitividad futura. Pero no se debe olvidar un tercer frente, que condiciona los avances: reconstruir el capital social, recuperando la confianza en las instituciones y en las posibilidades de nuestro país de ofrecer prosperidad a todos los ciudadanos, evitando riesgos de exclusión laboral y social.

Muchas reformas no tienen recorrido todavía para ser evaluadas y algunas se han quedado cortas, pero la salida de la recesión apunta que las difíciles decisiones adoptadas por gobiernos, empresas y familias empiezan a dar resultados. A la recuperación han contribuido las ganancias de competitividad exterior, el saneamiento financiero, la actuación del Banco Central Europeo (BCE) despejando el horizonte del euro y reduciendo el riesgo país, y la mejora en la senda de consolidación fiscal.

Los retos a medio plazo para España, sus instituciones y empresas son de gran calado. No caben soluciones simples y es necesario prestar atención a muchos frentes, teniendo presentes las interdependencias entre los problemas al definir líneas de actuación. Las propuestas del informe para responder a los desafíos estructurales están agrupadas en torno a tres grandes objetivos: *la mejora de la competitividad, el logro de un crecimiento socialmente incluyente y la sostenibilidad medioambiental de nuestro patrón de desarrollo.*

Mejorar la competitividad

El cambio del tejido productivo está en marcha por la destrucción de parte del anterior que no ha sobrevivido y el paulatino surgi-

miento de nuevos proyectos empresariales. Pero la transformación productiva que España necesita debe ir mucho más allá y pasa en buena medida por lograr que las empresas que nacen sobrevivan en mayor proporción que ahora y crezcan siendo más productivas. Para impulsar el avance por ese camino se necesitan emprendedores con la misma vocación que los anteriores pero mejor preparados. El informe propone las siguientes actuaciones para mejorar la competitividad:

- **Eliminar regulaciones que dificultan la competencia y el crecimiento de las empresas**

Se necesita simplificar y unificar numerosas regulaciones administrativas, muchas debidas a la falta de armonización y coordinación entre las comunidades autónomas. Es preciso extender las prácticas de reconocimiento automático de los certificados expedidos por las administraciones y eliminar trabas a las actividades de los autónomos relacionadas con pseudomonopolios injustificados de los colegios profesionales. Es preciso revisar las normativas laborales, de información contable, administrativas y fiscales que establecen ventajas para las empresas que no superan ciertos umbrales de tamaño, no están debidamente justificadas y desincentivan su crecimiento. Sería más positivo apoyar a las empresas pequeñas a cumplir normativas generales pensadas para mejorar el funcionamiento de las unidades productivas que excluirlas de la obligación de hacerlo.

- **Formación continua para empresarios y autónomos**

Los bajos niveles de formación de muchos emprendedores constituyen un riesgo para la continuidad y viabilidad de sus actividades que, probablemente, se está reforzando

debido al aumento de trabajadores autónomos. Muchos han emprendido actividades y asumido riesgos para responder a la falta de empleo sin contar con mínimos de formación sobre administración o financiación a medio plazo de un negocio. La elevada mortalidad de muchas empresas en los primeros años de vida representa pérdidas de recursos que podrían minimizarse con mejor preparación de los emprendedores. Deberían dedicarse recursos formativos a este objetivo —apoyándose en la enseñanza presencial y en la basada en las nuevas tecnologías— y realizarse esfuerzos de sensibilización social sobre este problema de los autónomos.

- **Potenciar el papel dinamizador de las grandes empresas**

Las empresas grandes obtienen mejores resultados en productividad y competitividad, basándose en sus economías de escala, el uso más intensivo del capital humano y tecnológico, mejores condiciones de financiación y mejor organización. Esas mejores prácticas deben ser referencias para otras empresas de menor tamaño. Cuando son proveedoras de las grandes y se adaptan a sus demandas de calidad y sus cambios, las grandes empresas se pueden convertir en motores de las pymes, dinamizando su profesionalización, su participación en procesos de mejora tecnológica y organizativa, y su internacionalización.

- **Atraer inversión directa extranjera**

La inversión directa extranjera tiene los efectos externos positivos de las empresas grandes y, además, atrae capitales estables y tecnologías de frontera, ofreciendo oportunidades de combinarlas con recursos humanos locales de cualificación media y alta. Las ventajas de coste que España ofrece en

estos momentos —tras los ajustes de los últimos años de los salarios y los precios de los activos inmobiliarios— deben ser aprovechadas para atraer inversión directa extranjera en actividades de medio y alto contenido tecnológico, que aceleren el cambio del tejido productivo.

- **Mejorar la financiación a los proyectos innovadores**

Los proyectos innovadores no podrán desarrollarse sin financiación adecuada, en volumen, plazos y condiciones. La contribución del sistema financiero español —especialmente el bancario— a un patrón de inversión más basado en el conocimiento, los activos intangibles y la innovación, requiere criterios de evaluación de proyectos distintos y garantías diferentes. El mayor riesgo de la inversión en intangibles exige incentivar formas de financiación no bancaria, como el capital riesgo, el *crowdfunding* o los segundos mercados. También será necesario que las empresas innovadoras refuercen sus recursos propios para financiar estos activos intangibles, generadores de valor pero difícilmente enajenables.

- **Incentivar la reestructuración de empresas viables financieramente vulnerables**

Es preciso evitar que empresas viables se vean abocadas al cierre debido a su vulnerabilidad financiera. El Real Decreto Ley de marzo de 2014 sobre reestructuración de deuda empresarial apoya esa supervivencia, pero se necesitan más medidas que aceleren este proceso (incentivar procesos extrajudiciales, crear una entidad independiente que facilite la negociación de la deuda con los acreedores, programas estandarizados de reestructuración de deuda para pymes, participación de la hacienda pública en la re-

estructuración, etc.). Una reforma fiscal que permitiera deducciones a la financiación con recursos propios desincentivaría el exceso de endeudamiento.

- **Mejorar el acceso a los mercados financieros**

El elevado endeudamiento de las empresas requiere que el desapalancamiento continúe, lo que frena la recuperación de la inversión. Hacer compatible el desendeudamiento con la reactivación exige mejorar las condiciones de acceso a la financiación, sobre todo la bancaria. La reforma del sector bancario y el saneamiento realizado van a permitir que el crédito se recupere, pero es necesario reducir la excesiva dependencia del crédito bancario, incentivando el acceso a la financiación directa en los mercados. La creación del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) facilitan el acceso de las pymes a la financiación, pero el tamaño de estos mercados es muy reducido siendo conveniente reformarlos para que más empresas participen en los mismos.

- **Apoyo selectivo a la I+D+i**

España necesita más actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación si quiere parecerse a las economías avanzadas de mayor éxito: las más basadas en el conocimiento. Ese esfuerzo no debe ser solo en volumen de recursos sino, sobre todo, de aprovechamiento de los mismos asignándolos solo a los grupos e instituciones de educación superior e investigación que ofrecen resultados, especialmente a los más productivos. Es crucial también reforzar la conexión de estas actividades con las empresas, incentivándolas y convenciéndolas para que participen mucho más en la financiación de las actividades de desarrollo tecnológico e

innovación. El sector público puede contribuir a avanzar en estas dos direcciones generando y difundiendo información sobre las unidades de I+D+i más productivas, las de mayor calidad y aquellas cuyos perfiles tienen mayor interés para las empresas.

Un crecimiento socialmente incluyente

Los mercados constituyen un formidable mecanismo de generación de renta y riqueza pero no garantizan buenas respuestas a todos los problemas de la sociedad, en particular a los de igualdad de oportunidades y garantía de acceso a servicios fundamentales. La calidad de las respuestas colectivas, canalizadas a través de las actuaciones públicas resulta decisiva en este caso, pero los fallos del sector público existen. Esa es la razón por la que deben abordarse reformas que mejoren la situación existente, en especial la de los ciudadanos y grupos sociales más vulnerables. Las propuestas del informe en este ámbito son las siguientes:

- **Acciones especiales para la formación de los parados**

Aunque se consolide la recuperación, la gran bolsa de desempleados de difícil reinserción será duradera, especialmente entre los que carecían de formación o han perdido sus competencias. Se requiere un ambicioso esfuerzo para mejorar la formación para el empleo, más difusión de las oportunidades de trabajo y más eficacia de los servicios de intermediación laboral. Los casos de corrupción aparecidos en ámbitos próximos a un problema social tan grave exigen condenas contundentes y revisiones en profundidad de las políticas. El logro de estos objetivos cruciales debe apoyarse en sistemas de evaluación continuada de las actuaciones y re-

forzarse con un uso intensivo de los recursos que a nivel europeo se asignan a estas finalidades. Los efectos de estas políticas pueden ampliarse con la colaboración de las empresas, combinando actuaciones formativas y prácticas laborales con el impulso del trabajo a tiempo parcial.

- **Reforma fiscal ambiciosa**

El equilibrio financiero requiere generar ingresos públicos mediante una reforma fiscal amplia, pues la presión fiscal efectiva en España es una de las más bajas de la UE. La reforma debe orientarse a aflorar bases imponibles hoy desfiscalizadas, y a la limitación de tipos reducidos, exenciones y desgravaciones de discutible justificación que limitan sensiblemente el volumen de ingresos. También a un reparto de cargas tributarias más justo que el actual, que favorezca el crecimiento, la competitividad y el empleo. La mayor presión fiscal sobre las rentas del trabajo que sobre las empresariales y las del capital se explica en parte por la movilidad de los capitales, pero deslegitima al sistema fiscal y debería ser corregida mediante acciones a nivel internacional y colaboración europea para limitar la competencia fiscal.

- **Lucha contra el fraude y la economía sumergida**

La otra fuente de desconfianza en el sistema fiscal es el fraude, ampliamente reconocido en los principales impuestos, directos e indirectos. La lucha contra el fraude por múltiples vías —la educativa, mediante la toma de conciencia de lo que significa, y la represiva, mediante acciones de inspección y castigo ejemplar, con adecuada publicidad— es imprescindible para reducir las consecuencias económicas del mismo, la injusticia que representa y las oportuni-

des de competencia desleal que ofrece. La economía fiscalmente sumergida, lejos de ser tolerada como un mal menor en épocas difíciles, debe ser perseguida porque puede que destruya tantos empleos en las actividades que cotizan como se mantienen ocultos.

- **Gestión pública orientada a resultados**

Todo el sector público debe gestionarse atendiendo a los resultados que se ofrecen a los ciudadanos. Para ello es necesaria una profunda reforma administrativa que debe comenzar por que las políticas establezcan objetivos definidos y evalúen permanente los logros alcanzados, mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. La cultura de la evaluación de las políticas públicas es imprescindible para su modernización efectiva y la rendición de cuentas a los ciudadanos, y para valorar la suficiencia de recursos y la eficiencia del sector público.

- **Ordenación competencial y financiera del sector público**

Los conflictos competenciales y las tensiones financieras entre niveles de gobierno han arreciado en los últimos años. Requieren una revisión ordenada y convincente del actual reparto de funciones y recursos, que evite ineficiencias y asimetrías injustificadas de recursos entre territorios. La Administración Central debe liderar ese proceso con autoridad, transparencia en sus planteamientos y objetividad en sus propuestas, sin retener recursos en competencias que ya no tiene ni apoyar las actuales ventajas de unas comunidades sobre otras. La dificultad de avanzar por consenso en este terreno no justifica retrasar más las soluciones sino que obliga a buscarlas con visión de Estado para evitar que los problemas se agraven por no abordarlos.

- **Fijar las prioridades de gasto**

La sostenibilidad financiera del sector público exige priorizar los gastos y los compromisos que España quiere y puede asumir a corto y largo plazo. Son decisiones cruciales para la viabilidad del Estado de bienestar, su sostenibilidad a largo plazo y la estabilidad social. Las opciones ideológicas y propuestas políticas se diferencian precisamente por sus distintos planteamientos en estos temas, pero las tensiones de los últimos años demuestran que sería conveniente construir consensos amplios en aspectos básicos de las respuestas a estas prioridades, especialmente entre los partidos de gobierno. Lograrlo permitirá reducir el esfuerzo dedicado a debatir continuamente sobre los pilares de las políticas y ocuparse más de mejorar sus resultados.

- **Pacto por la educación**

Los pobres resultados educativos requieren una propuesta específica en esta área de máxima importancia para el progreso social y económico. España ha de realizar un esfuerzo sostenido para solucionar este problema de una vez y para ello resultaría conveniente un amplio consenso social y político. Un gran pacto por la educación debe contemplar actuaciones en todos los niveles formativos, planteadas de manera que sus resultados sean evaluables y efectivamente evaluados. Es necesaria una formación básica de elevada calidad pues sus carencias se trasladan y pueden intensificarse en etapas posteriores. La educación obligatoria es clave para adquirir una cultura del esfuerzo, evitar el abandono temprano y asentar bien el aprendizaje de idiomas, hoy imprescindible. Mejorar los resultados de la educación superior, profesional o universitaria, condiciona la calidad del desempeño de los trabajos más cualificados, la formación de los

líderes y el patrón de desarrollo. También es preciso que existan incentivos y oportunidades para la formación en las distintas fases de la vida en las que se desarrolla la actividad laboral, etapas en las que es preciso fomentar la colaboración entre el mundo educativo y las empresas y las experiencias mixtas de formación y trabajo.

- **Garantizar el acceso a los servicios fundamentales**

Una adecuada definición de prioridades de gasto público debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales —seguridad, vivienda, educación— en iguales condiciones. Es dudoso que este requisito se esté cumpliendo. No puede descartarse que algunos niños, especialmente desfavorecidos, estén encontrando dificultades para acceder a los servicios educativos en las mismas condiciones debido a la pobreza de sus padres. Tampoco que algunas familias tengan dificultades para aportar los copagos que exigen algunos servicios sanitarios. La sociedad demanda respuestas a estas situaciones que ponen en cuestión la igualdad de oportunidades. La igualdad de acceso a los servicios fundamentales resulta también amenazada por las diferencias de recursos por habitante superiores al 50% entre las comunidades autónomas que han de prestar servicios como la educación, la salud o la atención a la dependencia. Además de ser fuente de inestabilidad institucional, esta situación cuestiona los principios constitucionales de igualdad entre todos los españoles.

- **Priorizar las acciones contra la pobreza**

La mejor respuesta contra la exclusión social de origen laboral es la recuperación del empleo, pero esto no será suficiente

si algunos hogares siguen sin alcanzar los ingresos que permiten escapar de la pobreza. Por consiguiente, la garantía de acceso universal a la sanidad, la educación o una vivienda digna han de ser vías para luchar contra la exclusión. Las administraciones autonómicas prestan estos servicios públicos y los servicios sociales de carácter más asistencial, junto con las administraciones locales. Por ello, la igualdad básica de recursos entre administraciones es imprescindible para combatir la pobreza en similares condiciones de partida, aunque la autonomía permita legítimas diferencias entre territorios.

Garantizar la sostenibilidad medioambiental

El crecimiento ha de permitir generar renta y empleo en abundancia pero también evitar las consecuencias negativas para el medioambiente y el bienestar de las generaciones futuras. Un patrón de desarrollo inteligente puede llevar aparejadas externalidades positivas como el desarrollo de yacimientos de empleo alrededor de las tareas de prevención, conservación y desarrollo de fuentes energéticas no contaminantes. Para lograrlo, se propone actuar en los siguientes ámbitos:

- **Limitar la expansión de suelos artificiales en las zonas más sensibles y su impacto medioambiental**

La ordenación del territorio y la planificación del desarrollo urbanístico deben incorporar una valoración de las externalidades negativas que este último genera, vinculadas al uso masivo del transporte privado, el agotamiento de recursos como el agua en determinadas zonas y el deterioro del paisaje. Es preciso incorporar a las decisiones

las consecuencias derivadas de la irreversibilidad —a escala de la duración de la vida humana— de la transformación del suelo natural en artificial (residencial y de infraestructuras).

- **Proteger la biodiversidad, el patrimonio forestal y los humedales naturales**

El retraso histórico en el inicio del moderno desarrollo económico español ha permitido disponer de una amplísima variedad de flora y fauna. Es un patrimonio a proteger mediante el uso efectivo de las figuras normativas apropiadas (parques naturales, legislación nacional de impacto ambiental, normativa ambiental comunitaria, aplicación de medidas agroambientales en el marco de la Política Agraria Común [PAC], etc.). Las actuaciones de conservación del entorno adquieren una relevancia innegable con un importante potencial de generación de empleo.

- **Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero**

Es preciso mejorar la eficiencia energética mediante el cambio en la composición de las fuentes de energía primaria empleadas para la producción de electricidad, aumentando el peso de la energía eólica, solar y las centrales de ciclo combinado, y disminuyendo el de la generación termoeléctrica con carbón y productos petrolíferos. Adicionalmente, el menor peso de la construcción y la terciarización pueden contribuir a desvincular el crecimiento del PIB de las emisiones de gases de efecto invernadero. La reducción del peso del transporte por carretera a favor del ferrocarril contribuiría también en la misma dirección, así como la adopción de reglamentos técnicos de construcción favorables al ahorro energético.

Recuperar la confianza en el futuro

Abordar un conjunto de actuaciones tan exigente es más difícil porque la confianza de la sociedad española en sí misma y en las instituciones se ha deteriorado gravemente. Recuperar ese capital social es un reto que reclama respuestas inmediatas porque afecta a la disposición a cooperar, eleva los costes de transacción y frena la recuperación.

La causa fundamental de la pérdida de confianza ha sido la crisis y sus consecuencias: la destrucción del empleo y la riqueza de muchas familias y empresas, y los ajustes fiscales. Estas pérdidas han quebrado las expectativas sobre las oportunidades que ofrece la economía y las coberturas que garantiza la sociedad. El desempleo masivo y las medidas de ahorro han generado desafección y descreimiento en la capacidad integradora de la economía y la gestión pública.

El deterioro de la confianza en gobiernos, legisladores y agentes sociales, reforzado por el afloramiento de comportamientos despilfarradores y corruptos, y la escasa disposición al consenso entre las fuerzas políticas dificulta la aceptación social de sacrificios. Muchos ciudadanos consideran que estos serían evitables con una Administración Pública más honesta y, sin duda, esto último es cardinal. Pero las soluciones no son simples y por eso es muy importante que las nuevas promesas sean realistas y los compromisos tengan capacidad de ser cumplidos y de contribuir de manera efectiva a recuperar el crecimiento y el empleo.

Cualquier propuesta responsable debe contemplar la salida de esta etapa difícil desde

una perspectiva amplia, ubicando los problemas de España en un marco europeo sin el cual sería más difícil todavía diseñar una estrategia para nuestro país en el escenario global. Ahora bien, no sirve cualquier estrategia europea: se necesita una gobernanza económica adecuada, capaz de definir polí-

ticas monetarias y fiscales eficaces para crecer y de conservar el acervo de la sociedad del bienestar. Ese horizonte, europeo y de largo plazo, es garantía de una mejor orientación de las respuestas a los desafíos que debe afrontar España para desplegar un patrón de crecimiento inteligente.